



La consulta plantea varias cuestiones relacionadas con la instalación de cámaras de videovigilancia, en los supuestos descritos en la misma, para actuar de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

En primer lugar es preciso indicar que del tenor de la consulta se desprende que las grabaciones son instaladas y visionadas por la Policía Local, y según el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

- a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación
- b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas
- c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Municipales”.

Dado lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica que establece “Se registrarán por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales: e) Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia.” Y la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, que en su artículo 1.2 señala que “2.- El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por las disposiciones sobre la materia.”

Esto implica que la actuación de la consultante queda sometida en su integridad a la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se Regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. En este sentido, debe recordarse que, según dispone el artículo 1.1 de dicha Ley, su objeto es regular “la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”. Y el apartado segundo señala que “Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en la presente Ley, el tratamiento automatizado de las imágenes y sonidos se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre (RCL 1992, 2347), de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal.”

Asimismo en relación con el tráfico es preciso indicar que, la disposición adicional octava de la LO 4/1997 se refiere a este tipo de supuestos como “La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (RCL 1990, 578 y 1653), y demás normativa específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre (RCL 1992, 2347), de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de 5 de mayo (RCL 1982, 1197), de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en el marco de los principios de utilización de las mismas previstos en esta Ley.

Además deberá de tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1997, según el cual “Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus accesos; salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional; constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la causación de daños a las personas y bienes”, toda vez que dicha instalación y el tratamiento consiguiente de los datos de imágenes de quienes circulasen por las inmediaciones del lugar de instalación de la videocámara debería corresponder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por todo lo expuesto, podemos concluir, que las cámaras descritas en la consulta, deberán de inscribirse como ficheros en el Registro General de Protección de Datos, siempre que las cámaras procedan a la grabación de imágenes así se entiende a sensu contrario de lo señalado en el artículo 7.2 de la Instrucción 1/2006 que “2.-A estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.” Respecto a los ficheros que han de crearse, dada la finalidad de los mismo, uno corresponderá con el control del tráfico y otro para la seguridad, describiendo en cada uno el lugar en que se encuentran ubicadas las cámaras.

En cuanto a la obligación de informar de las cámaras existentes el artículo 9 de la Ley Orgánica 4/1997 dispone que “El público será informado de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, y de la autoridad responsable.” Este artículo deberá de complementarse con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y Artículo 3 de la Instrucción 1/2006 que señala “Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de

información previsto en el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A tal fin deberán:

- a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y
- b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el Anexo de esta Instrucción.”

Por tanto, podrá informarse a la entrada de la ciudad de la existencia de cámaras de vigilancia para el control del tráfico y la seguridad pública.

Por último, respecto a la vigilancia de un polígono industrial por parte de la policía local, simplemente deberá de cumplimentarse lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997, e inscribir el fichero en el Registro General de Protección De Datos.